

Pol Morillas

Director, CIDOB
@polmorillas

Las elecciones al Parlamento Europeo han sido consideradas, tradicionalmente, elecciones de segundo orden. No solo por la menor importancia que los ciudadanos europeos puedan atribuir a estos comicios, y por unas tasas de participación por debajo de lo habitual, sino también porque a menudo las europeas se han jugado en clave nacional, con debates domésticos que han protagonizado la campaña electoral y con el incentivo para los votantes de castigar la acción y al partido de gobierno en los distintos estados miembros.

Cabe prever que parte de estas dinámicas se repitan en las elecciones del 6 al 9 de junio de 2024, momento en el que más de 370 millones de ciudadanos de los 27 estados miembros estarán llamados a las urnas para elegir a 720 eurodiputados que, en su conjunto, representarán a 450 millones de ciudadanos. Desde 1979, año de las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal –y las primeras elecciones multinacionales del mundo–, la Eurocámara ha ido aumentando su relevancia en el entramado institucional de la Unión Europea (UE).

Con el Tratado de Lisboa vigente, el Parlamento es parte intrínseca del procedimiento legislativo ordinario de la Unión, la codecisión, en la que, junto con el Consejo, se encargan de enmendar y adoptar la mayor parte de la legislación europea. Aunque la cifra es variable y discutible, se estima que un 70% de la legislación nacional tiene su origen en las decisiones comunitarias.

Por motivos obvios, las elecciones europeas no deberían ser consideradas de segundo orden. Aun así, Bruselas y Estrasburgo siguen siendo ciudades lejanas para buena parte de la ciudadanía, por mucho que los temas de la agenda política europea lo sean cada vez menos. La politización de los asuntos europeos, y la progresiva contraposición de puntos de vista sobre los mismos, es un fenómeno creciente e imparable. Las políticas que emanan de Bruselas ya no son juzgadas buenas por naturaleza, sino que son objeto de contestación, como cualquier política pública local, regional o nacional. Esto muestra el grado de madurez que cualquier sistema democrático debe alcanzar y, por lo tanto, contribuye a la construcción de un *demos* y una arena política europea, tan anhelados.

Ejemplos no faltan. Las recientes protestas contra la agenda verde de la Comisión Europea han provocado un parón de iniciativas legislativas, como la reducción del uso de los pesticidas en la UE. También se ha frenado la apertura a productos agrícolas de Ucrania tras las movilizaciones del sector agrícola en múltiples capitales europeas y en Bruselas. Empieza así a emerger un choque entre la agenda verde, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad fomentada por la Unión, y el precio a pagar por parte de los sectores más vulnerables a la transición ecológica, en este caso el sector agrícola.

La contestación a las iniciativas y la politización de los asuntos que conforman la agenda política europea abarcan también otros ámbitos. La defensa de Ucrania requiere mayores esfuerzos de gasto conjunto, algo que suscita recelos entre aquellos que rehúyen esfuerzos fiscales comunes y que, en cambio, celebran los que quisieran avanzar en una industria de defensa capaz de dar respuesta a los retos geopolíticos que azotan a la Unión. Las cuestiones migratorias siguen protagonizando intensos debates políticos y sociales en buena parte de los estados miembros, y la aprobación de un nuevo pacto de migración y asilo no se ha traducido en mayores dosis de solidaridad entre socios comunitarios. El debate sobre los recursos propios de la Unión, y el esfuerzo fiscal que llevan aparejados, sigue protagonizado por los denominados *estados frugales* y los partidarios de una mayor integración fiscal. Y así, ningún asunto clave de la agenda europea escapa hoy de las dinámicas de politización y europeización del debate político.

El resultado de las elecciones al Parlamento Europeo determinará el futuro del proceso legislativo en buena parte de estos asuntos. Las fuerzas europeístas argumentarán que el éxito en la gestión de crisis recientes necesita un esfuerzo estructural de profundización de la integración europea. Las fuerzas nacionalistas y euroescépticas, en cambio, instrumentalizarán malestares, como el del campo europeo, para reclamar una devolución de poderes a los estados miembros frente al «monstruo de Bruselas», como lo bautizó Hans Magnus Enzensberger. El avance legislativo dependerá de las mayorías que se conformen en el nuevo Parlamento, y también lo hará el carácter y la composición de la nueva Comisión Europea.

Esta monografía, resultado de un esfuerzo de reflexión conjunto liderado por CIDOB, CEPS e IE, y en el marco del proyecto DigiDem-EU, financiado por el programa Citizens, Equality, Rights and Values de la Comisión Europea, plantea algunos de los ámbitos temáticos más relevantes con vistas a las elecciones de junio, y presenta, en una segunda parte, la perspectiva electoral en varios estados miembros.

Así, la primera parte, editada por Carme Colomina y Héctor Sánchez Margalef, ambos investigadores de CIDOB, aborda asuntos como el futuro de la agenda verde europea (capítulo a cargo de Ana García Juanatey y Andrea Noferini), los debates económicos de la Unión (tratados por Víctor Burguete), la geografía del antieuropeísmo y la brecha urbano-rural (apartado de Agustí Fernández de Losada y Marta Galcerán), el papel de los jóvenes en la UE (analizado por Javier Carbonell), el fenómeno migratorio (visto por Francesco Pasetti), la defensa (abordada por Daniel Fiott), la política exterior y la ampliación (a cargo de Ilke Toygür y Luis de Lossada i Gallart), la desinformación (a cuenta de Carme Colomina) y el futuro de la integración europea tras las elecciones de junio (elaborado por Héctor Sánchez Margalef).

La segunda parte, editada por Sophia Russack, investigadora del CEPS, e Ilke Toygür, directora del IE Center for Innovation in Global Politics and Economics, reúne a destacados representantes de *think tanks* europeos, en cuyos capítulos se aportan las visiones desde Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica, Chequia, Polonia, Finlandia, Estonia, Hungría, Austria e Irlanda.

